

CHILE EN LA ENCRUCIJADA

A finales de septiembre de 1972, Orlando Sáez, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, SOFOFA, organización que agrupa a todos los grandes industriales chilenos, se mostraba jactancioso. En una rueda de prensa convocada para dar a conocer los agravios que los capitanes de la industria estarían recibiendo de la política catastrófica y demagógica de la UP, se permitió agregar: «Y no se olvide: una palabra mía paralizaría al país».

En realidad, tenía bastantes razones para mostrarse jactancioso. La burguesía, que había tenido que sufrir dos años de política UP, estaba preparada para lanzar su ofensiva. Por fin se había conseguido el acuerdo de la democracia cristiana, importante por los sectores de campesinos, empleados y obreros que controlaba, para dar el golpe definitivo. Hasta ese momento pragmático de la política, los demócratacristianos habían estado jugando un papel de opositores cerrados pero leales, en la esperanza de que una gran derrota electoral de la UP, en marzo de 1973, pondría el destino de Allende en sus manos, obligándole a pactar con ellos en una coalición que les permitiera regresar a usufructuar los jugosos puestos de gobierno, mientras se reducía el programa coherente de la UP a una serie de medidas demagógicas que dejaran intactas las raíces del sistema, tal como se había hecho durante la administración Frei.

Una encuesta realizada por sus expertos les obligó a cambiar de táctica: la derrota de la UP no sería tan grande como esperaban, y algo mucho peor aún: su política de tibia oposición había producido un desplazamiento de las masas conservadoras hacia las posiciones de ultraderecha del Partido Nacional.

Si el desplazamiento continuaba a ese ritmo, la DC saldría de las elecciones no ya en condiciones de exigir cambios a Allende, sino que, perdido su carácter de primera fuerza electoral de la oposición y de Chile, pasaría el eje de la oposición al Partido Nacional.

En esas condiciones, los demócratacristianos debieron girar a

la derecha una vez más, para sujetar el desbande de sus filas.

Esta tardía incorporación de la DC venía a completar la estrategia de la burguesía. Disponiendo de la SOFOFA y la SNA (Sociedad Nacional de Agricultura, donde se agrupan los terratenientes golpeados por la reforma agraria), habían extendido sus redes a los pequeños comerciantes, cuyo dirigente, Rafael Cumsille, estaba dispuesto a dar la orden de paro en cuanto se le indicara, y a la Confederación de Dueños de Camiones, cuya importancia radicaba en que la mayoría del transporte de carga se hace en Chile por carretera (lo que, dada la peculiar geografía chilena, es vital para la regular distribución de productos), cuyo

sis, sin embargo, no fue duradera. Y a principios de octubre, con un mes de retraso, se puso en marcha el plan septiembre.

El paro

Primero fueron los dueños de camiones, cuya imagen, y esto era importante, podía resultar simpática —en la práctica, pequeños burgueses con conciencia de comerciantes—. Aunque unas pocas empresas controlaban buena parte del transporte de carga, existía igualmente un fuerte sector en el que el dueño y el trabajador eran la misma persona, con lo que asociaba el paro a un paro de trabajadores.

El motivo: la noticia de que

lizado el país, no le quedaba otra cosa que irse. Si pretendía sacar sus masas a la calle, serían entonces los militares los que, para contener los desmanes de la izquierda, despedirían a Allende.

A otro nivel, el paro no era sólo un desvarío de las fuerzas más reaccionarias chilenas. No sin irritación, incluso los demócratacristianos admiten hoy que el paro fue financiado. Con dólares. Con dólares americanos. (El cambio —tal vez más real que el oficial— del dólar en el mercado negro bajó alrededor de un 30 por 100 en octubre, debido a la repentina inundación de dólares.)

La respuesta obrera

El plan estaba bien calculado y hubiera sido un éxito si no fuera por un detalle: no contó con que las clases populares —obros y campesinos— identificaban realmente a la UP con «su» gobierno, «el gobierno de los trabajadores». Cuando Sáez dijo la palabra prometida y los empresarios decretaron la huelga, los obreros decretaron trabajar. Y se tomaron las fábricas. Y si los técnicos faltaban, los obreros les suplían. Y lo hacían con éxito.

En un momento, los empresarios, que ya se frotaban las manos, se encontraron con que sus fábricas, libres de ellos, estaban trabajando más que nunca. En el campo acurrió algo similar. Pese a los llamamientos de las organizaciones campesinas, controladas por la derecha, el campo, en su inmensa mayoría, no paró. Y de nada sirvió que la DC pusiera todo su peso electoral. Un obrero preguntado en una encuesta, respondió: «Yo voto por la DC, pero ahora no se trata de votar, sino de estar con los compañeros». Desobediendo a su partido, obreros y campesinos DC hacían fracasar con su trabajo el plan tan minuciosamente calculado de los dirigentes de la burguesía.

Hay índices que reflejan esta respuesta. Y tal vez el más significativo sea el de la reducción del abstencionismo laboral a un índice muy próximo a cero —y habitualmente muy alto—, precisamente en los días en que la mayoría de la prensa repetía una

INFORME DE JOSE JUAN BARTOLOME Y MARIA TERESA RODRIGUEZ

dirigente, León Vilarín, ex detective expulsado del cuerpo oficial por corrupción, tras seguir un curso de «sindicalismo» en Estados Unidos, convertido en dirigente sindical sin profesión, había conseguido, mediante la oportuna compra de un camión —con dinero de origen desconocido—, convertirse rápidamente en máximo dirigente del gremio. Con la DC se pasaba a controlar a los sindicatos campesinos del sector reformado de la agricultura, así como al sector profesional y obrero, donde constituía una fuerza no despreciable (en las últimas elecciones de la CUT —Central Única de Trabajadores, sindicato único chileno— había obtenido casi el 30 por 100 de los votos).

En un principio se había pensado aprovechar las fuertes alzas de precios declaradas en agosto para, con pretexto reivindicativo, declarar un paro que se haría general, provocando una intervención militar que significase el golpe de Estado (deposición de Allende y llamada a elecciones generales). El estruendoso apoyo alcanzado por Allende con motivo del festejo de aniversario del triunfo electoral del 70, les paralizó en sus planes. Esta pará-

en la provincia más austral de Chile, Aysén, se iba a crear una empresa estatal de transporte (amenaza al trabajo de los camioneros en términos ideológicos: su independencia en peligro). El resultado: todo el abastecimiento de materias primas y productos de consumo queda distorsionado y casi paralizado.

Inmediatamente después, todas las organizaciones complotadas fueron llamando al paro en solidaridad con los camioneros. El comercio cerró sus puertas, los sindicatos de empleados controlados por la derecha (bancarios, públicos); los Colegios profesionales de abogados, médicos, ingenieros; las organizaciones campesinas y, ¿cómo no?, la SOFOFA y la SNA convocaron a la «resistencia civil» contra la «dictadura marxista».

Contando con el supuesto apoyo de los trabajadores demócratacristianos y la débil conciencia de la mayoría de los obreros, los empresarios, al cerrar, proponían seguir pagando los salarios, es decir, ofrecían vacaciones pagadas para que sus empleados se quedaran en sus casas. Una huelga patronal, en suma.

En ese momento, el Gobierno popular se halló indefenso, para-



y otra vez llamamientos de los partidos «democráticos» para el paro general.

Así fracasó la «resistencia civil». Peor aún, el control ideológico que reformistas y reaccionarios habían mantenido sobre una parte de los trabajadores se debilitó hasta esfumarse en algunos casos. Al mismo tiempo, los trabajadores descubrían que podían prescindir absolutamente de patronos y técnicos, de empleados y jefes. Era la derrota de la burguesía.

Los trabajadores no se limita-

ron a trabajar. Al quedarse sin jefes, nombraron sus propios jefes: se organizaron. Primero, a nivel de fábrica o de asentamiento; después, cuando descubrieron que, rotas las conexiones normales, necesitaban de todas formas de los compañeros de otras fábricas, establecieron sus propias conexiones: los comandos comunales. Si en una fábrica sobraban vehículos, se enviaban a los compañeros de otra para que pudieran aprovisionarse (no había transporte de carga). En los barrios obreros, si una tienda

cerraba, era abierta a la fuerza y voluntarios se encargaban de la venta. Otras veces ni siquiera se molestaban por las tiendas: ellos mismos se encargaban de retirar los productos de las distribuidoras y de repartirlos a la población. Paradójicamente, nunca estuvieron mejor abastecidos los barrios obreros que durante el paro, que buscaba provocar el desabastecimiento.

En los barrios altos fue distinto. Las tiendas cerraron y las que abrieron fueron destruidas por comandos fascistas. Provi-

dencia (zona «high») parecía una ciudad muerta; todo el comercio cerrado, la basura se acumulaba en las calles porque los barrenderos decidieron aplicar cierto tipo de huelga —marcharon a ayudar a sus compañeros de las poblaciones—, mientras dejaban que los «momios» se ahogaran en su propia «porquería».

La burguesía recurrió a todo. Los empresarios de las líneas de autobuses urbanos retiraron sus vehículos. Los trabajadores hicieron caminatas de dos horas, pero estuvieron en su fábrica trabajando. A veces, militares, y sobre todo coches del servicio oficial o de trabajadores de izquierdas ayudaban a suplir el transporte público. En ese momento, Allende estuvo en las manos de los trabajadores, y los trabajadores no le dejaron caer. El paro había fracasado.

Ni vencedores ni vencidos

Pero si el paro había fracasado, la situación se volvía insostenible. No es posible hacer trabajar casi un mes las fábricas cuando el transporte de materias primas, de repuestos, de abastecimientos depende del ferrocarril, aunque trabaje al doble de su ritmo normal, y de los pocos camioneros que no se han plajado al paro. Cuando cada viaje en busca de carga es una aventura en la que cada camión debe llevar protección contra las bandas fascistas, que riegan las carreteras de clavos. La situación se transformó en un empate que sólo era posible romper con la ofensiva. Pero la ofensiva suponía requisar los camiones y entregarlos a sus chóferes o a voluntarios, descerrar bodegas, tomarse distribuidoras.

El Ejército, que hasta ese momento había colaborado en mantener el orden, se negó a atentar contra la propiedad privada. Si estallaba la guerra civil, ¿de qué lado se iban a poner? Por otra parte, el Ejército nunca fue movilizado para cubrir los vacíos de la huelga del modo que lo habría sido en cualquier país que tuviese un Gobierno más representativo de los intereses tradicionales.

Recuperado del primer momento de desconcierto, Allende volvió a tomar la iniciativa. Su gobierno no sería el de la guerra civil. Y decidió salir del «impasse» a través de una jugada maestra. La entrada de altos mandos militares en el gabinete. Era una salida honrosa para los golpistas (se cedía en una serie de puntos concretos) sin que, aparentemente, se cediera en el programa, objetivo real del paro.

Pero, a otro nivel, esto significó el regreso a una política de desmovilización. Si parte de las empresas tomadas seguirían en manos de sus trabajadores, para otras se proponía la devolución. Los obreros deberían permitir el regreso de esos mismos patronos que arrojaran a la calle un mes antes por sediciosos. Los esfuerzos del Gobierno por convencerlos de las ventajas de la devolución se estrellaban en un

muro de lógico recelo. Cuatro meses después, el conflicto sigue planteado. A pesar de sus promesas, sólo con la fuerza pública podría el Gobierno devolver las industrias, y eso no puede hacerlo. En los casos en que logró convencer a los trabajadores, el resultado fue inmediato: mientras la derecha protesta por imaginarias represalias de la UP, la primera medida de los patronos reinstalados es la expulsión e incluso la persecución legal (con la complicidad del poder judicial) de los trabajadores destacados en la ocupación. Tal es el caso del diario «Sur», que, ocupado por sus tipógrafos y periodistas durante el paro (mientras el dueño llenaba el periódico de convocatorias a la huelga), se negó a publicar un aviso en contra del paro hecho por los trabajadores. Al ser devuelto, la primera medida adoptada por su propietario fue la de expulsar, fiel a su concepto de libertad de prensa, a 17 periodistas que apoyaron la toma, presentando incluso una querrela judicial contra ellos.

De esta forma, la entrada de los militares señalaba el punto límite a partir del cual la política de Allende podría dejar de ser un juego de maniobras tácticas para llegar a convertirse en una traición estratégica al proceso de transición al socialismo. Una brecha se abrió claramente entre los que apoyaban la medida y los que la aceptaban a regañadientes y como un mal menor.

Esta doble evaluación de la situación tenía sus orígenes en las divergencias que, a nivel estratégico, desde el primer momento dividieron a la UP en dos tendencias.

Los antecedentes de la crisis

El programa con el que la UP venció en las elecciones presidenciales de 1970 era, de hecho, un compromiso entre los programas de los dos grandes partidos marxistas.

Mientras el PC impulsaba un Frente Popular para la «ampliación de la democracia, antioligárquico, antifeudal, antimonopolista y anti-imperialista», en el entendido de que la etapa próxima sería la del desarrollo de un capitalismo nacional e independiente de intereses extranjeros, el PS, a través de su propuesto Frente de Trabajadores, renunciaba a todo intento de descubrir «una burguesía nacional» a la que aliarse, definiendo como tarea inmediata la lucha por el socialismo, al considerar como

entre ambas posiciones, porque mientras que para el PC la etapa de transición debería ser necesariamente larga para garantizar la suave creación de estas discutidas bases y, por lo tanto, el acento fundamental se ponía en la institucionalización de las condiciones creadas por la aplicación del programa, para el PS se trataba de un período de transición en el sentido más estricto del término, necesariamente inestable, donde el acento se ponía en la capacidad de la izquierda para atraer cada vez más grandes masas a través de realizaciones parciales, hasta lograr una supremacía sobre la burguesía que permitiera la entrada directa al socialismo.

En torno a estas dos posiciones han venido a girar los restantes partidos de la coalición. Mientras el MAPU y la IC den-

otros, por el contrario, la construcción del socialismo exigiría la previa destrucción del aparato del Estado burgués y la creación de un poder popular alternativo.

La presencia de Allende en la Presidencia sería importante por lo que supondría de neutralización del aparato del Estado y de punto de apoyo, en la medida en que el ejecutivo es el poder más efectivo del Estado para posteriores conquistas.

A medida que la UP ha ido llevando a la práctica las medidas que servirían para construir las bases para el socialismo y se ha producido la lógica respuesta a nivel político y económico de la burguesía amenazada, las divergencias opacadas por el programa común han vuelto a aparecer encarnadas en las dos perspectivas con que, dentro de la UP, se ha pretendido explicar la actual coyuntura chilena, así como en las soluciones propuestas para salir de la crisis actual.

CHILE EN LA ENCRUCIJADA

utópica toda pretensión de llegar a otro capitalismo que no fuera el dependiente, existente ya en Chile.

En la transacción final, las diferencias de programa pudieron ser resueltas mediante un recurso de lenguaje: «La UP trataría de construir las bases para una economía socialista». De esta forma, si bien se ligaba el programa a una lucha por el socialismo (tesis PS), al mismo tiempo se aceptaba la posibilidad de una etapa intermedia entre el capitalismo dependiente y el socialismo: el período de construcción de las bases para el socialismo (tesis PC).

En la práctica, este acuerdo verbal mantenía las diferencias

tro del Gobierno, y el MIR fuera de él, apoyan la posición de la mayoría socialista, el sector minoritario del PS (dentro del que se encuentra el propio Allende), el PR y grupos menores como el API y el Partido Socialdemócrata van a unirse a la posición del PC.

En realidad, ambas posiciones responden a diferentes concepciones sobre la estrategia para la conquista del poder. Mientras que para unos, el sector comandado por los comunistas, se trata de ir conquistando por etapas sucesivas cada uno de los diferentes centros del poder estatal: se tiene la Presidencia, luego debe ser el Parlamento, más tarde el poder judicial... Para los

La política de la UP

El programa en torno al cual se unificó la UP resumía, a nivel económico, dos tipos de objetivos de índole coyuntural: unos, tendientes a favorecer, mientras durase el período, a los trabajadores; de carácter estructural, los otros: creación de las bases para una economía socialista. Los primeros se concretaban en: disminución del paro, contención de la inflación, redistribución del ingreso y obtención de una alta tasa de inversión que asegurase la estabilidad de la economía.

Los objetivos estructurales se alcanzarían con la nacionalización de la Banca privada, accele-

LOS PARTIDOS POLITICOS CHILENOS

F. N. P. L.

Frente Nacionalista Patria y Libertad.—El más importante de los grupúsculos de extrema derecha. Netamente fascista a nivel ideológico, constituye la fuerza de choque de la extrema dere-

cha. Sus actividades son amplias; comprenden desde el apaleo de izquierdas, hasta el sabotaje y la voladura de tendidos eléctricos. A través de la doble militancia se encuentra infiltrado en los partidos mayores de la derecha, PN y DC. Su jefe es Pablo Rodríguez Grez.

P. N.

Partido Nacional.—Resultado de la fusión de los dos partidos tradicionales de la oligarquía: el liberal y el conservador. Sigue siendo el portavoz de los terratenientes y la gran industria. Su remozamiento se ha limitado a la utilización, bajo la influencia de su actual presidente, Onofre Jarpa, de la ideología fascista, disfrazada bajo los nombres de Poder Gremial, Democracia Funcional, etcétera.

PADENA

Partido Democracia Nacional.—Fantasma que vive a la sombra del PN. Su significación política es mínima. Comparte plenamente

los planteamientos de su partido-madre, radicalizándolos aún más a la derecha.

D. R.

Democracia Radical.—Escisión por la derecha del Partido Radical, caracterizada por su furioso anticomunismo. Sus mentores son el senador Julio Durán y el ex Presidente González Videla, quien fuera elegido en 1944 con votos comunistas, lo que agradeció poniendo al PC fuera de la ley.

P. I. R.

Partido de Izquierda Radical.—Pese a su nombre, es también una escisión por la derecha del PR. Su significación aún no es posible determinarla. Se presenta como

el partido del «socialismo democrático antitotalitario» y su fuerza está entre los profesionales y empleados públicos de la clase media de provincias. Sus líderes son Bossay y Alberto Baltra. Este último estuvo a punto de ser el candidato de la UP en las pasadas elecciones presidenciales.

D. C.

Democracia Cristiana.—Hasta el momento, el mayor partido de Chile en cuanto a peso electoral. Pluriclasista, es la versión europeizada de los viejos movimientos populistas-caudillistas latinoamericanos. Como éstos, conjuga la demagogia populista con vocabulario anti-imperialista y seudosocialista (socialismo comunitario), con una práctica política tí-



El ex Presidente Frei con el Presidente Nixon.

lización de la reforma agraria y explotación del campo en forma cooperativa; creación de un área de propiedad social que comprendiera las grandes empresas monopólicas, que deberían ser nacionalizadas, y la nacionalización de todo el sector extractivo, es decir, de la minería del cobre, el salitre y el carbón. Sector clave por su importancia en el comercio exterior chileno (un 80 por ciento del ingreso por las exportaciones chilenas proviene del cobre). Todo ello se debería realizar aprovechando los recursos legales que el capitalismo monopolista de Estado ha puesto en manos del poder ejecutivo del Estado burgués.

Apenas asumió Allende la Pre-

sidencia, la UP empezó a poner en práctica su política: un alza general de sueldos y congelación de los precios fue la primera medida. Considerada por los economistas tradicionales como una aberración (habitualmente, la solución a una crisis como la que enfrentó a Chile en los últimos años del Gobierno Frei era la inversa: congelación de salarios, alza de precios o descenso del tipo de interés para favorecer la inversión a través de una elevación de las ganancias), reposaba sobre una lógica sorprendente, pero correcta, en un primer momento: al subir los salarios, y con ellos los costos, permaneciendo fijos los precios, deberían reducirse las ganancias unitarias

de los empresarios, que, para mantener estable su ganancia total, deberían aumentar la producción aprovechando la capacidad instalada ociosa y recurriendo a contratar más mano de obra. La venta de esta producción aumentada quedaría garantizada por el nuevo poder comprador de los trabajadores, alcanzado mediante el alza de salarios y la disminución del desempleo.

Incluso la objeción más importante: ¿qué ocurriría cuando toda la capacidad estuviese siendo empleada y a pesar de ello la demanda siguiera siendo superior a la producción?, podía ser fácilmente respondida: en ese caso, los empresarios invertirían

para aprovechar la demanda, y como el Estado ya controlaría la Banca nacionalizada, se podría, a través de créditos selectivos, orientar esta inversión hacia los productos más importantes por lo popular de su consumo o por los estrangulamientos que pudieran provocar.

Sin embargo, este edificio reposaba sobre un pilar falso: el supuesto comportamiento racional de los empresarios. Puestas en marcha las medidas, se descubrió que el tan mentado «homo economicus», incapaz de ver más allá de sus cifras de ganancias, había dejado paso a un burgués con conciencia de clase. Irracional en términos económicos, el comportamiento de los empresarios fue perfectamente coherente en términos políticos. Prefirieron en muchas ocasiones recibir el golpe sobre sus ganancias que colaborar con una política que, a largo plazo, buscaba su destrucción como clase.

Y la presión económica hubo de ser sustituida por una presión política: el control que los trabajadores realizarían dentro de las fábricas sobre cómo se estaban empleando los recursos disponibles. Cuando la decisión de no colaborar fuera muy clara, se recurriría a la requisición forzosa.

Es así cómo las primeras estilizaciones de empresas no se produjeron, tal como se había pensado, a través de la compra de sus acciones por la Corfo. La burguesía no quería vender. Hubieron de pasar varios meses para que la creación del área social apareciera ligada no a un proyecto a largo plazo, sino a la necesidad inmediata de impedir el boicot a la producción de parte de la burguesía.

Pero a partir de este momento se entraba en un círculo vicioso: la intervención de empre-

picamente reformista. Bajo control de la burguesía modernizante ligada a las nuevas industrias de transformación.

P. R.

Partido Radical.—Portavoz tradicional de las capas medias, principalmente provincianas, laico y socialista (está afiliado a la II Internacional Socialdemócrata). Su peso se ha ido reduciendo con las sucesivas escisiones y la pérdida de parte de sus efectivos hacia el PC y la DC.

I. C.

Izquierda Cristiana.—Reciente escisión de la DC, producto del desacuerdo de varios líderes parlamentarios

con la política de coalición con la derecha. Ha recibido el apoyo de otros escisionistas DC que inicialmente formaron el MAPU, tales como J. Chonchol (ex ministro de Agricultura de Frei y Allende). Ideológicamente confuso, ha aparecido en ocasiones muy cerca de la extrema izquierda, colaborando con el MIR.

P. C.

Partido Comunista.—El partido más fuerte orgánicamente de la izquierda, aunque electoralmente el PS parece tener más influencia. Ortodoxo, disciplinado, su fuerza se concentra entre los mineros y los obreros calificados de las industrias modernas, así como entre las capas medias. Ha sido frecuentemente acusado de

derechista, incluso en 1946, por el PC soviético.

M. A. P. U.

Movimiento de Acción Popular Unitaria.—Inicialmente, una escisión por la izquierda de la DC en tiempos de Frei. En la actualidad se declara marxista leninista. Con un esquema organizativo similar al del PC, a nivel de programa aparece a la izquierda de éste y más cerca de las posiciones del PS.

P. S.

Partido Socialista.—Partido del Presidente Allende, es también el partido más crítico de la gestión UP. A diferencia de los partidos socialistas europeos, no proviene de la escisión entre

socialdemócratas y comunistas en 1917, sino de la fusión de grupos escindidos del PC, por su desacuerdo con Stalin, con movimientos socializantes originados en la crisis de 1930. Ideológicamente marxista-leninista, sufre del constante enfrentamiento entre la tendencia mayoritaria, representada por Carlos Altamirano, frecuentemente acusado de ultraizquierdista por el PC, y la minoría de la que forma parte el propio Allende, partidaria de una estrecha colaboración con éste.

USOPO

Unión Socialista Popular. Escisión personalista del PS, dirigida por un ex secretario general de éste, Raúl Ampuero. Fuera de la UP, pretende representar una al-

ternativa a la izquierda de ésta. Su única fuerza, cualitativamente muy importante, es su influencia entre los mineros del cobre.

M. I. R.

Movimiento de Izquierda Revolucionaria.—El más conocido de los grupos de extrema izquierda chilenos. Fuera de la UP, positivamente crítico de ésta, colabora con frecuencia con sectores aliados a ella: PS, MAPU, IC. Predominantemente juvenil, su fuerza se encuentra entre los estudiantes y los obreros de determinadas industrias, así como en las poblaciones marginales. Su importancia no es numérica, sino cualitativa, al haberlo elegido el PC como punto de referencia para sus ataques al «ultraizquierdismo».

sas para asegurar la producción introducía una muy lógica inseguridad dentro de los empresarios. Estos, si para evitar la requisación iban a aumentar hasta el tope su producción, no estarían dispuestos en ningún caso a introducir más dinero en algo de cuya propiedad no estaban seguros. Y el trecho de capacidad ociosa se fue haciendo angustiosamente más estrecho, mientras la demanda acrecentada de los trabajadores seguía presionando.

Fue en ese momento cuando Pedro Vuskovic, ministro de Economía, elegido para el cargo por su carácter de «técnico independiente», comprendió que la solución técnica al problema era una solución política. No quedaba sino acelerar el ritmo de expropiaciones; si era posible, comprando acciones; si no, mediante la requisación pura y simple, apoyándose en los trabajadores de las fábricas. Con esta política, la UP se acercaba peligrosamente a los límites de la legalidad. El Congreso destituyó a Vuskovic por abuso de poder, cuando ya en el seno de la UP se habían producido divergencias.

Para unos, que jamás habían esperado un proceso de cambios estable, la política de Vuskovic de acelerar por todos los medios la creación del área social era la única forma de consolidarlo, en la medida en que destruyese los grandes centros de poder económico de la burguesía. Para los otros, cuyo portavoz era el PC, preocupados fundamentalmente por llegar a algún tipo de acuerdo con la DC que permitiese elaborar en el Parlamento las leyes que instituyeran constitucionalmente el área de propiedad social, la política de Vuskovic, que por su carácter radical se enajenaba las simpatías de la DC, era particularmente peligrosa. Esto se concretó en dos «slogans», en torno a los cuales se dividió la izquierda: para el PS, el MAPU y la IC se trata de «avanzar para consolidar». Para el PC, el PR y otros grupos menores se trata, por el contrario, de «consolidar para avanzar». Mientras tanto, la economía chilena había llegado al tope. Mil novecientos setenta y uno había sido el año de más rápido crecimiento económico de las últimas décadas: 8,5 por 100, cuando en la década de los cincuenta había sido 3,9 por 100 y en la de los sesenta del 4,4 por ciento. Pero este crecimiento había sido a costa de ocupar toda la capacidad instalada, mientras la inversión, si bien había crecido, lo había hecho a través de la fuerte elevación de la inversión pública, puesto que la privada se había reducido.

La crisis económica

A mediados de 1972, el nuevo ministro de Economía, Carlos Matus, tuvo que anunciar un cambio en la política económica. En la lucha por contener la inflación, las empresas se estaban desfinanciando. Ahora se trataba de cambiar de táctica: fuer-

tes aumentos en los precios, que vendrían acompañados de pagos extras para los trabajadores para que éstos no vieran disminuido su nivel de ingresos. Con una inflación que golpeará a la burguesía, se trataba de contener un desabastecimiento que ya empezaba a dejarse sentir.

Y es que al tiempo que los trabajadores aumentaban su poder adquisitivo, también lo hacían las clases altas. La aceleración de la reforma agraria, realizada de acuerdo con la muy generosa Ley de Frei, entrega a los ex terratenientes una gran masa de dinero que, al no dirigirse hacia la inversión, se estaba concentrando en la compra de productos de consumo, elevando desmesuradamente su demanda.

Otro fenómeno coadyuvaba a reducir la oferta disponible: el contrabando. Una de las prime-

quidez o que pretenden marcharse a pagar por el dólar un precio hasta cuatro veces superior al precio de compra oficial.

Entonces se produce un fenómeno curioso: un producto considerado indispensable para Chile puede hacer un viaje de ida y vuelta; si, por ejemplo, es importado, pagará 12 escudos por cada dólar de su precio, y el comprador tiene la oportunidad de pasarlo a Argentina o Perú, donde a cambio del mismo, con el alto producto de su venta, comprará dólares que podrá de nuevo vender en mercado negro a 400 escudos o más.

Para los productos chilenos ocurre lo mismo. Cualquier producto vendido al cambio de 400 escudos por dólar resulta extraordinariamente barato, y el contrabando por las extensas y mal vigiladas fronteras con Ar-

gentina, Perú o Bolivia se transforma en un negocio extraordinariamente lucrativo.

Esto explica la repentina irrupción del turismo sobre Chile. Los argentinos descubrieron que cambiando en el mercado negro sus dólares podían no sólo veranear prácticamente gratis, sino también aprovechar para hacer sus compras. Cuando, en 1971, medio millón de argentinos se plantaron en Viña del Mar, a su regreso cruzaban la frontera no ya con ropa, sino hasta con neveras, televisores o sacacorchos. Para dar una idea: al cambio actual del mercado negro, un traje de caballero en la mejor tienda de Santiago cuesta 500 pesetas; una cajetilla de cigarrillos rubios, menos de tres pese-

tas; para llegar al colmo, un libro de Alianza Editorial de 50 pesetas resulta en Santiago a menos de diez, después de haber sido importado!

Fue para frenar esta salida increíble de productos (hubo gente que desde Ecuador se llegaba en avión a Santiago para hacer sus compras) que se estableció la obligación de cambiar diez dólares USA por día para los turistas que quisieran entrar en Chile, así como la prohibición de sacar más de un determinado valor en productos chilenos. Pero si esto redujo la fuga a través del turismo, no afectó al contrabando. Hoy la frontera argentina y el Sur de Perú son abastecidos, incluso de carne, por Chile.

El paro de octubre, al eliminar los «stocks» de comercialización, hizo aún más sensible el desabastecimiento. Mientras la inflación afecta fuertemente las rentas de los trabajadores, los productos escasean o desaparecen del mercado, y otro mercado, el mercado negro, hace su aparición.

CHILE EN LA ENCRUCIJADA

tas medidas de la UP fue la de establecer una escala de tipos de cambio. Hoy, por ejemplo, en Chile, un dólar vale, al tipo de cambio oficial, 47 escudos si lo vende un turista extranjero, pero vale 120 escudos si es un chileno quien lo compra para viajar al extranjero. Puede valer 12 escudos si es para pagar una importación que se considera vital u 80 escudos si es para un producto considerado superfluo. Junto a esta escala, mucho más amplia de lo descrito, subsiste un mercado negro del dólar. Las trabas que la UP pone a la entrega de divisas para hacer turismo (con objeto de impedir la fuga de dólares al extranjero) induce a muchas de las personas que se encuentran con un exceso de li-

gentina, Perú o Bolivia se transforma en un negocio extraordinariamente lucrativo.

Esto explica la repentina irrupción del turismo sobre Chile. Los argentinos descubrieron que cambiando en el mercado negro sus dólares podían no sólo veranear prácticamente gratis, sino también aprovechar para hacer sus compras. Cuando, en 1971, medio millón de argentinos se plantaron en Viña del Mar, a su regreso cruzaban la frontera no ya con ropa, sino hasta con neveras, televisores o sacacorchos. Para dar una idea: al cambio actual del mercado negro, un traje de caballero en la mejor tienda de Santiago cuesta 500 pesetas; una cajetilla de cigarrillos rubios, menos de tres pese-

El mercado negro

Creadas las bases reales para el desabastecimiento, la burguesía no tuvo escrúpulos para aprovecharlo política y económicamente. Políticamente, porque las colas para obtener determinados productos o la ausencia de otros en el mercado permitían hablar de la política de hambre de la UP o del desastre socialista. Económicamente, porque, creada la psicosis de escasez, la burguesía pudo emplear el dinero que no quería destinar a la inversión, en una especulación infinitivamente más productiva.

Ello no es difícil si se tiene en cuenta que la intervención del Estado en la economía se había concentrado en la producción, mientras que la distribución mayoris-

En dos años se han expropiado 3.750 predios, con un total de más de cinco millones y medio de hectáreas. Es decir, en dos años el doble que en los seis años del mandato de Frei.



ta era prácticamente manejada por un monopolio privado, Codina, controlando el Estado sólo el 26 por 100 de los productos distribuidos. Si ya a ese nivel empezaban a producirse sangrías de productos hacia el mercado negro o el contrabando, al llegar al comerciante minorista, la anarquía era total. Por citar un caso, a pesar de que durante 1972 la producción de cigarrillos aumentó un 26 por 100 en relación a la de 1970, los cigarrillos empezaron a escasear. A partir de octubre no podían conseguirse sino tras largas colas. En octubre, un paquete de cigarrillos, cuyo precio son ocho escudos, costaba en Arica, a dos mil kilómetros del centro donde se producen, 200 escudos.

El Estado intervino primero las distribuidoras, pensando cortar las raíces del mal. Los cigarrillos seguían apareciendo en el mercado negro, mientras las colas eran cada día más largas en los puestos de venta. Decidido a llegar al fondo del asunto, el Gobierno investigó pacientemente qué ocurría cuando los cigarrillos llegaban a los puestos de venta, mientras aumentaba las cantidades distribuidas en un 10 por 100 para el total de Santiago y un 18 por ciento en el centro, donde parecía haber más escasez. Es ahora cuando se han conocido los resultados de la investigación. Sobre un total de 980 puestos investigados, sólo cuarenta vendían todos los cigarrillos que recibían; 250 vendían parte, pero se reservaban otra, alegando que era para clientes fijos; doscientos cincuenta vendían unas pocas cajetillas y desviaban el grueso hacia el mercado negro, y 150 puestos de venta, más de una quinta parte del total, no vendían un solo cigarrillo al público, destinando el total recibido al mercado negro, donde se venden alrededor de tres o cuatro veces su valor, mientras se vitupera al Gobierno marxista que no permite ni fumar a los chilenos.

Con los productos agrícolas ocurre algo parecido. Los especuladores se dirigen al campo, donde ofrecen precios superiores a los oficiales. El campesino, que no está obligado a vender su producción a ninguna distribuidora oficial, acoge la oferta. En camionetas, camiones y hasta en coches americanos último modelo, se traslada el producto a Santiago, donde, vendido en el mercado negro, ya no valdrá el precio que cobró el agricultor, sino diez y quince veces más.

Es un círculo vicioso, en medio de la psicosis de escasez. Un rumor bien lanzado puede crear la escasez artificial de muchos productos, favoreciendo a los que hábilmente preparan «stocks» para el caso. Hace cuatro meses no había problemas con la pasta dentífrica. De repente corrió el rumor de que iba a faltar. (El ama de casa, siempre ociosa, del barrio alto; luego, por no ser menos, la mujer del empleado, sin otra ideología que la de las revistas femeninas, son el caldo de cultivo de esta psicosis.) De repente, las farmacias agotaban sus «stocks» de pasta dentífrica en horas. Después comenzaron a venderse los tubos de uno en uno. El



rumor era cierto: faltaba pasta dentífrica, ¡había que redoblar los esfuerzos para conseguir más! A cuatro meses del rumor, cuando la producción de pasta dentífrica se ha duplicado en ese tiempo, es imposible obtener un tubo si no es haciendo una magnífica cola.

Otro caso espectacular fue el de los zapatos. Con extraño sincronismo, un día de diciembre toda la prensa de derechas tituló su primera página: «Los zapatos suben un 100 por 100». Repentinamente se produjo una carrera hacia las zapaterías; las mujeres, sobre todo, compraban los pares de tres en tres, y como las zapaterías no están pensadas como supermercados, se formaban colas para los zapatos. Al día siguiente, en los mismos diarios que anunciaron el alza, venían en primera página también las fotografías de las colas. Es decir, los zapatos no sólo subían, también escaseaban. A cuatro meses del rumor, los zapatos no sólo no han subido, sino que, a pesar de la inflación galopante, han bajado de precio —por baja temporada—. Las colas han desaparecido, pero faltan los números más corrientes. Ahora se ha sabido que fue un experimento coordinado de toda la prensa de oposición para medir su grado de poder en la creación de la historia colectiva que caracteriza la mejor batalla de la oposición: aprovechar un aumento del poder de compra de todas las capas medias, insólito en otros Gobiernos

no marxistas, para, creando graves problemas económicos al Gobierno, ganarse políticamente a estas masas que ven frustrada su repentina capacidad de consumo, eje sobre el que gira la conciencia política de la pequeña burguesía y, por supuesto, la de la mujer media chilena.

Una alternativa popular

El recurso a la acción policial contra el mercado negro es insuficiente, en primer lugar por la vastedad de las tareas, pero también porque los funcionarios encargados de llevarla a cabo, inspectores de Dirinco, no son siempre seguros. Se han dado casos de soborno con una justificación política: estos funcionarios integrados a la burocracia estatal en administraciones anteriores —casi todos provienen del anterior Gobierno DC—, no tienen el menor interés en lograr la eliminación del mercado negro. Pese a todo, la lucha está emprendida.

Recientemente, Alfende, en una concentración, daba las siguientes cifras de acaparamientos descubiertos: en 174 negocios se escondía la siguiente mercancía: treinta y cinco mil pares de zapatos, 10.000 tubos de pasta dentífrica, 100.000 pollos, 150.000 tarros de conserva, 5.000 bolsas de cemento, 1.000.000 de repuestos de automóviles, 60.000 paquetes de detergentes, 350.000 tambores de aceite, 20.000 sacos de arroz, 20.000 sacos

de azúcar y 500.000 litros de vino. Para un español, esta lista puede parecer ridícula, pero cuando en estos momentos conseguir medio kilo de azúcar o un octavo de litro de aceite, o un paquete de Omo —que aquí ya no se publicita— significa hacer una cola de dos horas (lo mismo que para conseguir sólo un rollo de papel higiénico —también escaso—); cuando al mismo tiempo los trabajadores están realizando esfuerzos sobrehumanos para que nada falte, descubrir, y esto es sólo la parte visible del «iceberg» del acaparamiento, que hay un sector que está jugando económica y políticamente con la situación de los hogares de menos ingresos chilenos, tuvo que provocar un rugido de indignación.

A principios de enero, la UP intentó pasar a la ofensiva. No era suficiente la acción policial. Se convocó a las organizaciones de masas para que, encuadradas por manzanas, se encargaran de velar por el abastecimiento popular. Las Juntas de Abastecimiento y Precios —las «siniestras» JAP de la oposición—, organizaciones formadas por los vecinos de un barrio, deberían determinar las necesidades de las familias para los productos más esenciales. El Gobierno, a través del control de todas las distribuidoras y utilizando contratos de exclusividad, se encargaría de hacer llegar los productos necesarios. El comercio, si bien recibiría las mercancías, tendría que venderlas controlado por miembros de las JAP, en proporción exacta a las necesidades de cada familia y a precio oficial. A diferencia del racionamiento burocrático impuesto desde arriba, se trataba de que las propias masas organizaran su abastecimiento. Si era racionamiento, como una desatada campaña de la prensa de oposición le llamó, era racionamiento popular.

La burguesía se dio cuenta del peligro: la medida dividiría a los chilenos en pobres y ricos, en los que resolvían su problema de abastecimiento a través de las JAP —aquí estaban en juego los sectores de empleados y obreros con pretensiones, y hasta ahora feudo de la derecha— y los que les arruinaban el negocio de las JAP —comerciantes y burguesía con otros intereses políticos—. A esto se le llamó el «control por el hambre», aunque las JAP no tenían obligatoriamente que ser utilizadas para abastecerse.

El sector moderado de la UP comenzó a vacilar. Las propias tensiones internas (dos de los ministros militares provenientes del acuerdo entre oposición y Gobierno de octubre amenazaron con dimitir en desacuerdo con la medida) hicieron el resto. Todavía hoy, la política anunciada no se ha puesto en marcha: Mientras, las colas, el mercado negro, los acaparamientos, siguen formando parte de la vida cotidiana de los chilenos. A su vez, la oposición, la DC en concreto, tomó la idea de la «canasta popular» —así se llamó a la cuota de alimentos básicos que habría sido obligatorio distribuir— y, llamándola «paquete Frei» —con los mismos artículos—, la reparte en estos momen-

tos como arma efectiva de su campaña electoral. La distribución sigue en sus manos.

El conflicto constitucional

La respuesta de la burguesía no se ha limitado al terreno económico. Si bien la UP dispone del Gobierno, aún quedan en sus manos los otros dos poderes que, constitucionalmente, forman el Estado: el legislativo y el judicial.

El boicot económico de la burguesía hubiera podido ser vencido, al menos provisionalmente, con una legislación adecuada, pero el Congreso, controlado mayoritariamente por la derecha, lógicamente se ha negado a legislar en contra de sí mismo. Más aún, pasando a la ofensiva, ha pretendido alterar la tradición constitucional chilena para arrebatarle al Presidente facultades que otros Presidentes tuvieron, pero que no están dispuestos a permitir sean ejercidos por un marxista.

Esta contraofensiva constitucional de la burguesía, en apoyo de la contraofensiva económica, se ha visto reforzada por la actitud que, si no puede calificarse de sorprendente, sí, por lo menos, deja bastante malparada la supuesta independencia del poder judicial.

El poder judicial

Recelosos primero de la «experiencia chilena», los jueces han pasado a adoptar, en su inmensa mayoría, una actitud de franca hostilidad. Puestos descaradamente al servicio de los intereses contrarios al proceso chileno, han colaborado, a través de fallos increíbles, a obstaculizar en lo que han podido la política del Gobierno. Y no se trata sólo de la impunidad que ofrecen a los futuros golpistas cuando condenan al ex general Viaux, autor intelectual del asesinato del general Schneider, que ha confesado en multitud de ocasiones que actuó intentando provocar un golpe de Estado, a dos años de cárcel, por considerar que sólo es culpable de «intento de secuestro simple sin daño grave para el ofendido» (?). O del hecho de absolver a un terrateniente, «por legítima defensa», que atacó a balazos a un grupo de campesinos desarmados que se había tomado su fundo, de acuerdo con la política de reforma agraria. Para un juez de la Corte Suprema, consultado en televisión sobre el caso, «tan delincuente es el ladrón que asalta una casa como el campesino que se toma un fundo».

Los Tribunales han pasado a la ofensiva contra el Gobierno, utilizando recursos judiciales como las precautorias, para impedir el funcionamiento de las empresas intervenidas. Por las precautorias se prohíbe vender o comprar a las empresas requisadas sin contar con el asentimiento de los antiguos dueños. Es decir, enfrentan a la empresa con la alternativa de paralizar su producción o de efectuar su devolución a los patronos.

En otros casos se procesa a funcionarios o miembros del Go-

bierno por acusaciones inverosímiles: Hernán del Canto, secretario general de Gobierno, es procesado por «hurto» —mientras la prensa le tilda de homosexual, aunque en otros términos— por «perturbación de la posesión y del régimen de posesión y dominio de las radiodifusoras» —ordenó durante el paro de octubre la formación de una cadena nacional de emisoras, hecho previsto por la ley—.

Otro alto funcionario, Patricio Palma, actual director de Dirinco, es acusado de «abigeato». Requisó 200 terneras destinadas al mercado negro, obligando a sus dueños —la Sociedad Agrícola y Ganadera Ancoa Ltda.— a venderlas a precio oficial.

Los jueces no tienen necesidad de ocultar sus simpatías y pueden organizar comidas de confraternidad con los terratenientes expropiados, los industriales y los políticos de la oposición, mientras el honorable presidente del Tribunal Supremo dará su bendición desde la cabecera de la mesa.

Una última institución del sis-

tema constitucional chileno, aún puede decir la última palabra: es el contralor general de la República. Tradicionalmente reservado para los casos muy conflictivos, el contralor se ha convertido en un hombre muy atareado. Cuando no se trata de la inconstitucionalidad de un decreto o un nombramiento, se trata de una falta de ortografía que podría «oscurecer el sentido del texto». Lo importante es que decretos y

nombramientos no lleguen a publicarse en el «Diario Oficial», con lo que tomarían fuerza legal.

Los límites de la UP

La vía chilena al socialismo ha llegado así a un punto muerto. Es cierto que se ha conseguido completar prácticamente la reforma agraria emprendida por Frei (en dos años se han expropiado 3.570 predios con un total de 5.568.196 hectáreas, frente a los 1.480 fundos y 3.564.522 hectáreas de los seis años demócratacristianos). El área social comprende

ahora el 25 por 100 de la producción del sector industrial y el 18 por 100 del empleo en ese mismo sector; el ingreso se ha redistribuido (del 53,7 por 100 que representaba el ingreso de los asalariados en el total nacional, se pasó en diciembre de 1971 al 65,7 por ciento). Y el paro se ha reducido drásticamente. Mientras, la minería y la Banca han sido nacionalizadas. Pero al mismo tiempo, los márgenes legales dentro de los cuales se puede mover la UP son cada vez más estrechos. Mientras, la misma utilización de estos recursos legales ha dado a la burguesía la posibilidad de reorganizarse para contraatacar. En tanto que conduce a una desmovilización parcial de los trabajadores, al hacer recaer la dinámica del proceso sobre la capacidad de maniobra y la habilidad política de los dirigentes del Gobierno.

Si el paro de octubre y su respuesta popular demostraron que la capacidad de movilización de los trabajadores permanecía intacta, la forma en que se negoció la salida (presiones para la devolución de fábricas, arreglos parciales con los patronos huelguistas...) puede arrebatar al Gobierno esa confianza que precisamente el paro demostró era el mejor apoyo de la UP.

Esto es grave, porque también octubre fue la demostración de que la burguesía no ha perdido el tiempo. Como señalara Fidel Castro durante su visita a Chile en 1971, «también la burguesía aprende». Pasado el primer momento de pánico, cuando realmente creyeron que les venía encima el «terror rojo», los burgueses han sabido aprovechar la absoluta impunidad que el régimen de libertades chileno hoy les ofrece (increíble para cualquiera que llegue de fuera) para organizarse, bien en escuadrones fascistas para la acción directa, como Patria y Libertad o el Comando Rolando Matus (PN), bien en organismos como Proteco (Protección de la Comunidad), donde se agrupa a los vecinos pudientes de los barrios altos para que reciban la instrucción militar pertinente para hacer frente eficazmente a la próxima guerra civil.

Las organizaciones monopolistas atraen a sus filas a los pequeños comerciantes, profesionales e incluso un sector de empleados para formar el Poder Gremial —gremio patronal, será: la alternativa al poder del Gobierno— que hará sus primeras armas en el paro de octubre, dirigiendo el movimiento sedicioso.

Es cierto que, a pesar de todo, los partidos de la burguesía tienen divergencias. Desde los partidarios de la eliminación física de la UP hasta los que especulan con una domesticación del Gobierno mediante la coalición con el sector moderado de la UP. Pero tampoco la UP es homogénea y si, aparentemente, hay unanimidad sobre el proyecto socialista a largo plazo, las diferencias en las concepciones estratégicas tienen su reflejo en la lucha diaria. Mientras el sector de izquierdas promueve los Comandos Comunales, como base de poder popular, paralelo y capaz de

CHILE EN LA ENCRUCIJADA



A medida que la UP ha ido llevando a la práctica las medidas socializadoras se ha producido la respuesta de la burguesía amenazada. Uno de sus brazos más violentos es el grupo extremista de derechas Patria y Libertad, cuya sede aparece en esta foto.



El enfrentamiento electoral no va a ser ni el decisivo ni el último de los enfrentamientos por los que desde el día siguiente a las elecciones presidenciales de 1970 la vía chilena al socialismo ha venido difícilmente discurriendo.

enfrentar al poder burgués, y la movilización permanente de los trabajadores, para los comunistas esta política, en la medida en que significa la aparición de centros de poder dotados de una relativa autonomía, y, por lo tanto, difícilmente controlables por el aparato estatal, es peligrosa, aventurista y ultraizquierdista (?).

El paro de octubre, para unos, favoreció el avance, al deslindar los campos por encima de los partidos, entre trabajadores y burguesía (el caso de obreros DC que no acataron la orden de paro de su partido); para los otros, al abrir las puertas a un enfrentamiento, arruinaba sus perspectivas gradualistas y las posibilidades de un acuerdo, no con los trabajadores DC, sino con sus líderes.

Las divergencias PC-PS

Estas divergencias han salido en forma aparatosa a la luz pública a un mes de las elecciones. El motivo fue el proyecto de creación del área social presentado por el actual ministro de Economía, Orlando Millas (PC). En el programa de la UP se señalaba, en líneas generales, que habían de ser expropiados los grandes monopolios existentes en una serie

de rubros, en total 245 empresas. Más tarde, y cuando parecía posible llegar a un acuerdo con la DC para legislar sobre el tema, se especificaron 91 empresas que se consideraron monopolios. Sin embargo, al fracasar los contactos con la Democracia Cristiana, el proyecto no pudo convertirse en ley y pasó a dormitar en los cajones del Congreso, mientras la propia dinámica del proceso llevaba a intervenir una serie de empresas, incluidas o no dentro de la lista de las 91. Pero si estas empresas, de hecho, pasaron al área social, legalmente seguían sólo intervenidas, es decir, su propiedad legal no había variado.

Para la izquierda de la UP, para la que lo importante era el arrebatar los centros de poder económico a la derecha, el problema de la propiedad legal era secundario; para los moderados, esto último era precisamente lo importante, y para salir del «impasse» decidieron tomar la iniciativa: sin consultar a los otros partidos, aprovechando la presencia de Millas en Economía y con la anuencia de Allende, presentaron un nuevo proyecto de creación del área social, donde, junto con ofrecer unas mejores condiciones para la expropiación, se reducía la cifra inicial de 91 empresas a expropiar a 49, que, estando ya intervenidas, sólo transformarían

su condición legal. Para obtener el apoyo de la DC a este nuevo proyecto, se ofrecía la posibilidad de devolver otras 123 empresas intervenidas que no se consideraban monopolios.

Los efectos no se dejaron esperar. Mientras, a nivel político, el PS, MAPU, IC, anunciaban su oposición al proyecto, e incluso en el caso del PS, retiraban a varios de sus miembros de algunos altos cargos en el Gobierno; en las fábricas afectadas por la medida se producía una movilización, que llegó a concretarse en la aparición de barricadas en protesta contra el Gobierno.

Allende echó marcha atrás y anunció que el proyecto sería discutido antes de enviarlo al Congreso, pero ya las divergencias se habían hecho públicas, con un intercambio de cartas en la prensa entre comunistas, que acusaban a los socialistas de «electoralistas-ultraizquierdistas», y socialistas, que denunciaban la política comunista de alianza con el enemigo de clase del proletariado.

Las elecciones de marzo

Es dentro de este contexto donde se presentan las elecciones parlamentarias de marzo.

Cuando el impulso inicial de la UP se va deteriorando como con-

secuencia de la guerra económica de desgaste que le ha declarado la burguesía, y se encuentra imposibilitada de legislar en forma de romper la resistencia ante la oposición derechista en el Congreso; cuando las leyes existentes son interpretadas por los jueces en su sentido más reaccionario, ni siquiera el aparato estatal, teóricamente bajo su control, es seguro. También la burocracia se muestra reticente, cuando no francamente obstruccionista.

Pero la burguesía, a su vez, tampoco puede constitucionalmente llegar más lejos. Puede dictar leyes en el Congreso, pero el Presidente, haciendo uso de sus poderes constitucionales, las vetará. Destituir ministros, mientras el Presidente los cambia de cartera. Los jueces protegerán a los latifundistas y el contralor suspenderá los decretos presidenciales, pero el Presidente tendrá «el recurso de la insistencia». Si un juez ordena devolver una industria requisada, el intendente (gobernador) negará a los ex propietarios la fuerza pública necesaria para proceder a la devolución, «para evitar los posibles incidentes que pudieran alterar el orden público». Se ha llegado al empate constitucional. Con Allende de Presidente, la izquierda no conquistó el poder, pero lo neutralizó. En estos momentos, ni la

burguesía tiene fuerza legal para aplicar su política tradicional, ni la izquierda puede legalmente desembarazarse de sus estorbos y avanzar con la constitución hacia el socialismo.

Teóricamente, las elecciones parlamentarias podrían representar una salida. Si la UP alcanzase la mayoría parlamentaria, podría poner en marcha una legislación que le permitiese avanzar. Por su parte, la oposición, que hoy tiene la mayoría en el Congreso, si aumentase su fuerza hasta reunir los dos tercios de los representantes, podría, constitucionalmente, destituir al Presidente y poner término, en forma legal, a la experiencia chilena hacia el socialismo.

Ambas posibilidades son utópicas. Para que la UP alcanzase la mayoría parlamentaria necesitaría conseguir, no la mayoría absoluta —que sólo le daría el control del Parlamento (Cámara baja)—, sino reunir más de los dos tercios de los votos para lograr recuperar su desventaja en el Senado (Cámara alta); de los 50 miembros de éste, sólo se renuevan 25, mientras que de los 25 que continúan en sus puestos, sólo nueve son de la UP.

Es decir, para que las elecciones de marzo significaran una salida constitucional a la crisis, sería necesario que uno de los dos bandos en pugna arrasara electoralmente al otro, lo que, dentro de todos los cálculos, es prácticamente imposible.

Allende fue elegido con un 36,6 por 100 de los votos emitidos. Más tarde, en abril de 1971, en las elecciones municipales, la UP alcanzó el 48,6 por 100, mientras la derecha reunía el 48,2 por 100. Sin embargo, en las elecciones municipales, tradicionalmente vence el partido del Presidente que acaba de asumir (bien porque se desee seguir el carro del triunfador, bien porque se piense que los municipios serán mejor gestionados por partidos que cuentan con el apoyo del poder central).

Probabilidades electorales

Desde entonces, las confrontaciones parciales entre Gobierno y oposición han dejado, en conjunto, un saldo favorable a esta última. Sobre cinco elecciones parlamentarias parciales, cuatro fueron ganadas por la oposición y una por el Gobierno. Este resultado tan desalentador, aparentemente, para la UP, queda en parte compensado por dos hechos: en todas las confrontaciones, la UP no descendió por debajo del 45 por 100 (recuérdese que Allende salió elegido por el 36,6 por ciento), y en las elecciones sindicales (obreros, campesinos, estudiantes), su fuerza ha permanecido intacta, quedando compensados algunos retrocesos con avances en otras áreas.

Jugando con las cifras electorales, a partir del precedente de las elecciones parlamentarias de 1969 se podría llegar a unas predicciones teóricas. En 1969, los partidos que después formarían la UP alcanzaron el

42 por 100 de los votos, pero esto era antes de la escisión de la Democracia Radical, sector derechista del PR, que en las municipales de 1971 alcanzó el 4 por ciento de los votos. Por otra parte, y sin que pueda determinarse su peso electoral, se han producido otros trasvases: antes de las elecciones presidenciales, un sector de la DC se pasó a la izquierda para formar el MAPU (Movimiento de Acción Popular Unitaria), y posteriormente, mientras el PR vuelve a sufrir una escisión por la derecha con la aparición del paradójicamente autodenominado Partido de Izquierda Radical (PIR), la DC sigue perdiendo sus líderes parlamentarios más importantes, que se pasan a la UP con el nombre de Izquierda Cristiana.

Si creyésemos en la estabilidad

el segundo año ha conocido el crecimiento de la oposición, que ha empleado todos los instrumentos de que disponía en una lucha política y económica muy hábilmente llevada.

Contando con su predominio en los medios de comunicación, la burguesía ha sabido cambiar de piel para presentarse como la impulsora de un proyecto popular y nacionalista como alternativa al «totalitarismo marxista». Jugando con las dificultades reales de abastecimiento, ha desarrollado una hábil campaña de captación de las capas medias y trabajadoras de débil conciencia de clase. Mientras, en el campo, los terratenientes pasaban a presentarse ahora como los propugnadores de la entrega inmediata definitiva de la tierra expropiada, para su cultivo en forma indivi-

so cuando se descubre que la solución a las colas propuestas por la derecha es la elevación indiscriminada de precios, con congelación de salarios, «la libertad de comercio», como dicen en perifoneo, para reducir una demanda que consideran excesiva (pues arrebatada a la burguesía y a las capas medias parte de un consumo que tradicionalmente fue sólo suyo).

En este terreno, el de la lucha ideológica, la burguesía, aparentemente, lleva las de ganar. Dispone de la mayoría de los medios de comunicación, mientras la izquierda, en minoría, no ha sabido estar a la altura de las circunstancias. Por otra parte, siempre resulta más fácil decir «en tiempos de Frei no había colas» que explicar por qué las colas son un mal menor en la política de hacer accesible a la mayoría de la población los bienes que antes estaban reservados a una minoría.

Pese a todo, se puede calcular que la UP no perderá votos (y en ese caso, la mayoría de dos tercios de la derecha es inalcanzable). El problema es saber si los ganará y en qué proporción.

A su vez, parece claro que el porcentaje alcanzado en abril de 1971 representa un punto límite. Las vacilaciones y los problemas a los que actualmente se enfrenta la UP deben necesariamente reducirlo y, por lo tanto, debe ser la oposición la que alcance la mayoría absoluta.

¿Cuál es el alcance de las elecciones?

La derecha ha querido presentar las elecciones de marzo como

CHILE EN LA ENCRUCIJADA

de las tendencias electorales, podría calcularse que la cifra final que debía alcanzar la UP rondaría el 38 por 100 de los votos (los trasvases provocados por las escisiones deberían neutralizarse). Sin embargo, el problema no es sencillo.

La UP está en el Gobierno; mal que mal, su política ha tenido unos efectos. ¿Cómo asimilará el cuerpo electoral estos efectos? De salida surge un aspecto desfavorable; después de un primer año en que la derecha se encontraba desconcertada y dividida, y la UP pudo actuar casi sin trabas,

dual, a los campesinos. En las fábricas intervenidas, la DC agitaba el «slogan» de la autogestión, que jamás intentó aplicar durante su gobierno, como alternativa a las empresas estatizadas.

¿Por quién se inclinarán ahora los chilenos? ¿Por los que objetivamente han luchado por ellos o por los que demagógicamente —mientras descubren, por fin, la existencia del «pueblo»— ocultan tras palabras sus verdaderos intereses —reconstruir el latifundio o devolver los monopolios expropiados a sus antiguos dueños—? El contraste se hace más aparato-

RESULTADOS DE LAS TRES ÚLTIMAS ELECCIONES REALIZADAS EN CHILE

RESULTADOS TOTALES (EN NUMERO DE VOTOS Y PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE VOTANTES)

PARLAMENTARIAS 1969		PRESIDENCIALES 1970		MUNICIPALES 1971				
	VOTOS	%		VOTOS	%			
PN.....	480.523	20,0	Alessandri.....	1.031.159	34,9	PN.....	513.874	18,1
DR.....	—	—	Tomic.....	821.801	27,8	DR.....	110.021	3,9
DC.....	716.547	29,8				DC.....	729.398	25,7
PADENA.....	44.818	1,9				PADENA.....	13.487	0,5
CODE.....	1.241.888	51,7	CODE.....	1.852.960	62,7	CODE.....	1.366.780	48,2
PR.....	334.119	13,9	Allende.....	1.070.334	36,2	PR.....	266.480	9,4
PC.....	383.049	15,9				PC.....	477.862	16,9
PS.....	294.448	12,2	UP.....	1.070.334	36,2	PS.....	633.367	22,3
UP.....	1.011.616	42,0				UP.....	1.387.709	48,6
USOPO.....	51.904	2,2	Nulos.....	31.505	1,1	USOPO.....	29.527	1,0
Independientes...	2.104	0,1				Independientes...	24.121	0,9
Nulos.....	98.617	4,0				Nulos.....	37.265	1,3
Total votantes...	2.406.129	100,0	Total votantes...	2.954.799	100,0	Total votantes...	2.835.402	100,0
Total inscritos...	3.244.892	100,0	Total inscritos...	3.539.747	100,0	Total inscritos...	3.792.682	100,0
Abstenciones....	838.763	25,8	Abstenciones....	584.948	16,5	Abstenciones....	957.280	25,2



Fidel Castro en Chile.

un plebiscito. Sin embargo, a la hora de interpretar ese plebiscito es donde aparecen las diferencias.

La Confederación Democrática (CODE), que es la forma en que se presenta agrupada la oposición, es el resultado de la coalición de dos grandes partidos, la DC y el PN, con el agregado de varios partidos menores: el Partido Democrático Nacional (PADENA), la Democracia Radical (DR) y el Partido de Izquierda Radical (PIR).

Para la extrema derecha, representada por el PN con el agregado de la DR y el PADENA, lo que se decide en las elecciones es si Chile quiere o no un Presidente socialista. La victoria de la oposición, aunque no fuera por los dos tercios, legitimaría la tesis del golpe de Estado, que siempre ha mantenido. «Puesto que la mayoría de los chilenos no quiere como Presidente a Allende, al eliminarlo ilegalmente mediante un golpe, no haríamos sino cumplir con el primer mandato constitucional, que es respetar la voluntad democrática de los chilenos».

La DC ve igualmente un plebiscito. Sin embargo, para éstos, lo que se decide no es la legitimidad del Presidente (legítimo, puesto que fue elegido constitucionalmente), sino la de su programa. «El pueblo chileno no quiere el programa de la UP, luego éste

debe ser cambiado por otro que sí represente a la mayoría de los chilenos». Y es aquí donde se abre la puerta para que Allende, haciendo uso de sus facultades constitucionales, organice un gabinete de coalición entre el sector moderado de la UP con la DC, implementando un programa de transacción entre ambas colectividades.

Pero si la derecha, tras su aparente unidad, llega dividida a las elecciones (¿qué sentido darle al resultado electoral?), la izquierda, que no está dispuesta en todo caso a aceptar el carácter plebiscitario que pretende la derecha, se plantea elevar el porcentaje con el que fue elegido Allende para seguir avanzando, ya que sabe que en ningún caso obtendrá mayoría absoluta.

Y al interpretar las consecuencias de este avance, nuevamente aparecen las divergencias. Para unos se trata de forzar a la DC (admitiendo su sinceridad cuando habla de la «necesidad de los cambios») a participar en la política de la UP. Para los otros, la importancia de las elecciones es meramente indicativa. De acuerdo con su cálculo, lo importante no es la cantidad de los votos, sino su calidad: conseguir el apoyo mayoritario de los trabajadores, obreros y campesinos es fundamental para cuando se produzca la

confrontación que consideran inevitable. El apoyo de las capas medias se conseguirá no moderando el programa para atraer a sus líderes, sino mostrando desde el poder que la política revolucionaria es la solución a sus problemas.

Así se llega a la conclusión de que las elecciones tienen el sentido de una doble confrontación: entre derecha e izquierda; CODE y UP primero, pero también dentro de cada bando, entre nacionales partidarios del golpe de Estado y demócratacristianos, buscando domesticar la UP en la CODE. Dentro de la UP, entre los comunistas, partidarios de moderar el programa y llegar a un acuerdo superestructural con el centro, que consideran representado por la DC y el ala izquierda de la UP, que pretende acelerar el proceso para evitar, o bien su absorción por una política reformista, o bien su eliminación a manos de la derecha.

Las alternativas

Las elecciones de marzo abren así un margen de interrogantes: si la UP alcanzara más del 44 por ciento de los votos, se consolidaría, al menos provisionalmente, y propablemente la oposición se fraccionaría entre partidarios del golpe a como hubiere lugar y los

que intentarían llegar a algún tipo de acuerdo con la UP, con posibilidades de que una fracción de la DC se pasase a la izquierda.

Entre el 38 y el 44 por 100, la hipótesis más probable, la inestabilidad del sistema no se alteraría y las posibilidades de una confrontación violenta que decidiera la solución a la crisis constitucional, serían máximas, dependiendo de la forma que adoptase la distribución de votos dentro de cada bando. Por debajo del 38 por 100, la UP habría fracasado, pues el no lograr aumentar, o incluso disminuir, su peso popular significaría que había quedado aislada y sería dentro de la coalición gubernamental donde estallarían las divergencias entre los que considerasen que se había perdido por ir demasiado aprisa, enajenando las capas medias, y los que, por el contrario, le echaran la culpa a la excesiva lentitud y a las repetidas vacilaciones del proceso, que habría decepcionado a las masas populares.

Revista de las fuerzas de que dispone cada bando, el enfrentamiento electoral de marzo no va a ser ni el decisivo ni el último de los enfrentamientos por los que, desde el día siguiente a las elecciones presidenciales de 1970, la vía chilena y pacífica al socialismo ha venido difícilmente discutiendo. ■ J. J. B. y M. T. R.